JUNTA DE ANDALUCIA

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

(O.E.P. 2010)

PRUEBAS SELECTIVAS, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, PARA INGRESO EN EL **CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES GENERALES, ESPECIALIDAD ADMINSITRADORES GENERALES (A1.1100)**

ADVERTENCIAS:

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. El presente ejercicio está compuesto de dos partes, siendo ambas obligatorias y sumatorias.
3. La primera parte consta de 100 preguntas y la segunda parte de 50 preguntas que deben ser contestadas en la "Hoja de Examen" en el mismo orden en el que figuran en el cuestionario.
4. Cada pregunta tiene cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.
5. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de Examen es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
6. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en las Hojas de Examen.
7. Si se equivoca puede pedir otra Hoja de Examen.
8. Para cada participante su puntuación final será la correspondiente al número de aciertos netos obtenidos en el ejercicio: A-(E/3), siendo A el número de aciertos y E el número de errores.
9. Cada acierto se valorará con un punto y cada contestación errónea se penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada. Si cuando se apruebe la plantilla definitiva ésta no alcanza el número de 150 preguntas establecido en las Bases de la Convocatoria, con el fin de garantizar que los aspirantes puedan obtener la máxima puntuación en el ejercicio, la Comisión de Selección adaptará la valoración de cada acierto y de cada error.
10. La Comisión de Selección esta facultada para determinar, con anterioridad a la identificación nominal de los opositores, el número mínimo de aciertos netos (A-(E/3) necesario para aprobar el ejercicio.
11. El tiempo para la realización de este ejercicio es de 180 minutos.
12. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.

ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

Si desean un ejemplar del mismo pueden obtenerlo en la siguiente página web www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica

PARTE TEÓRICA

1.- El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma podrá ver expresamente limitados algunos de los derechos fundamentales del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución por:

a) Auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
b) Los Artículos aplicables del Código Penal.
c) El contenido del fallo condenatorio.
d) La Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2.- Los derechos y libertades del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española se tutelan por:

a) Ley ordinaria
b) El recurso de amparo
c) El Defensor del Pueblo
d) El recurso de inconstitucionalidad

3.- La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados:

a) Tiene un mínimo de 21 miembros que representan a los grupos parlamentarios proporcionalmente a su importancia numérica.
b) Tiene un mínimo de 27 miembros según la composición de los grupos parlamentarios.
c) Tiene las funciones previstas en el artículo 79 de la Constitución.
d) Podrá nombrar una Comisión de Investigación en caso de urgencia y si están disueltas las Cortes o ha expirado su mandato.

4.- El Estado tendrá que contar con la autorización previa de las Cortes Generales para obligarse por Tratados o Convenios Internacionales en el caso de:

a) Tratados en materia educativa.
b) Tratados de carácter político.
c) Tratados de carácter financiero.
d) Tratados comerciales.

5.- La Delegación legislativa:

a) Se otorga mediante Ley ordinaria cuando se trate de la formación de textos articulados.
b) Se otorga mediante Ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
c) Se otorga mediante ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
d) Se otorga mediante Ley Orgánica cuando se trate de formación de textos articulados.

6.- La moción de censura:

a) Deberá ser propuesta por al menos la quinta parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
b) No podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación.
c) Requiere para su adopción la mayoría cualificada del Congreso de los Diputados.
d) a y b son correctas.

7.- El Consejo General del Poder Judicial está integrado por:

a) El Presidente del Tribunal Constitucional y 20 miembros nombrados por el Parlamento por un periodo de cinco años.
b) El Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros nombrados por el Gobierno por un periodo de tres años.
c) El Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.
d) El Presidente del Tribunal Constitucional y 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de tres años.

8.- Las Comunidades Autónomas no tienen competencia exclusiva sobre:

a) La artesanía
b) Los montes y aprovechamientos forestales
c) Sanidad e Higiene
d) Marina mercante

9.- El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal:

a) Por una Ley Marco.
b) Por Ley Orgánica.
c) Por Decreto-Ley
d) Por atribución expresa de las Cortes Generales.

10.- Están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad:

a) 50 Diputados
b) El Presidente del Tribunal Supremo.
c) El Fiscal General del Estado.
d) 30 Senadores

11.- Según el artículo 135.4 de la Constitución Española los límites del déficit estructural y de volumen de la deuda pública sólo podrán superarse:

a) En caso de catástrofes naturales.
b) En caso de recesión económica por acuerdo del Consejo de Ministros.
c) En caso de recesión económica apreciada por mayoría simple del Congreso de los Diputados.
d) a y c son correctas.

12.- ¿Que servicio NO se encuentra reservado a favor de los municipios por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía?

a) Alumbrado público.
b) Tratamiento de aguas residuales
c) Taxi.
d) Nada de lo anterior es correcto.

13.- La estructura económica de Andalucía se caracteriza por:

a) El gran peso de su sector primario en el PIB, seguido por el turismo, y siendo el sector de menor participación el sector secundario.
b) El gran peso del sector primario en el PIB, seguido por la industria y la construcción, y siendo el sector de menor participación el sector terciario.
c) El gran peso del sector terciario en el PIB, seguido por la industria y la construcción, y siendo el sector de menor participación el primario.
d) El gran peso del sector terciario en el PIB, seguido por la agricultura, y siendo el sector de menor participación el secundario.

14.- .De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la actualización del sistema de financiación deberá ser aprobada por:

a) El Consejo de Gobierno.
b) La Comisión Mixta de transferencia.
c) La Comisión Mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Comunidad Autónoma.
d) El Consejo de Política Fiscal y Financiera.

15.- .El Parlamento de Andalucía, podrá retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en tramitación ante las Cortes Generales:

a) Por mayoría de 3/5 ante cualquiera de las Cámaras, antes de que haya recaído votación final.
b) Por mayoría de 2/3 ante cualquiera de las Cámaras, antes de que haya recaído votación final.
c) Por mayoría de 3/5 ante el Senado antes de que se haya procedido a su votación.
d) Por mayoría de 3/5 ante el Congreso antes de que se haya procedido a su votación.

16.-. Salvo que se disponga otra cosa, el nombramiento por el Consejo de Gobierno de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía tendrá efecto:

a) Desde el día de la aprobación del Decreto por el Consejo de Gobierno.
b) Desde el día siguiente al de la aprobación del Decreto por el Consejo de Gobierno.
c) Desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
d) Desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

17.-. El Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía podrá delegar, entre las facultades que tiene atribuidas:

a) Coordinar la acción exterior del Gobierno.
b) Nombrar y separar a las personas titulares de las Consejerías.
c) La orden de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del nombramiento de la persona titular del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
d) Asegurar la coordinación entre las distintas Consejerías y resolver los conflictos de atribuciones entre las mismas.

18.- Las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía son:

a) Fiscalizadora y jurisdiccional a ambas instituciones.
b) Fiscalizadora e interventora a ambas instituciones.
c) Fiscalizadora y jurisdiccional al Tribunal de Cuentas y fiscalizadora a la Cámara de Cuentas de Andalucía.
d) Fiscalizadora e interventora al Tribunal de Cuentas y fiscalizadora a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

19.- En la Administración de la Junta de Andalucía el recurso de reposición que, en su caso, se interponga contra los actos dictados por delegación, salvo que en esta se disponga otra cosa, será resuelto por:

a) El órgano delegante.
b) El órgano delegado.
c) El superior jerárquico común.
d) El titular de la Consejería.

20.- Una sociedad anónima cuyo capital pertenece en un 51 por ciento a la Junta de Andalucía y el resto a accionistas privados:

a) Se clasificará como una sociedad mercantil del Sector público andaluz y una entidad instrumental privada de la Junta de Andalucía.
b) Se clasificará como una sociedad mercantil del Sector público andaluz y una entidad instrumental pública de la Junta de Andalucía.
c) Se clasificará como una sociedad mercantil del Sector público andaluz y una entidad instrumental mixta de la Junta de Andalucía.
d) Se clasificará como una sociedad mercantil del Sector público andaluz y una entidad instrumental empresarial de la Junta de Andalucía.

21.- El procedimiento ordinario de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía requiere:

a) La iniciativa de los partidos políticos.
b) La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos.
c) La aprobación de las Cortes Generales por mayoría simple.
d) La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios.

22.- ¿Qué entidades instrumentales creadas por ley se caracterizan en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, por la posibilidad de ofrecer servicios en régimen de libre mercado?

a) Las Fundaciones.
b) Las Agencias de Régimen Especial.
c) La Agencias Públicas Empresariales.
d) Las Sociedades Mercantiles.

23.- El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía habrá de ser consultado con carácter preceptivo sobre:

a) Los recursos extraordinarios de revisión que se interpongan.
b) Las reclamaciones administrativas previas a la vía judicial, civil o laboral.
c) Los expedientes disciplinarios por faltas graves.
d) Los expedientes disciplinarios por faltas muy graves.

24.- Según el Tratado de Lisboa, la Unión Europea tiene competencia exclusiva en materia de:

a) Redes transeuropeas.
b) Medio ambiente
c) Política monetaria de los estados miembros con moneda euro.
d) Cohesión económica, social y territorial.

25.- ¿Cuál de las siguientes Instituciones de la Unión Europea ostenta la competencia de ejecución del presupuesto de la comunidad?:

a) La Comisión
b) El Consejo
c) El Parlamento Europeo
d) El Consejo Europeo

26.- Respecto de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:

a) El Consejo elabora la política exterior y de seguridad común.
b) La Comisión Europea fija los objetivos y orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común.
c) El Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ejecuta la política exterior y de seguridad común.
d) a y c son correctas.

27.- ¿Cuál de las siguientes actividades ha quedado fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior?

a) Comercio.
b) Transporte.
c) Turismo.
d) Publicidad.

28- NO es un rasgo de la burocracia

a) El reclutamiento en base al liderazgo carismático.
b) La estructura competencial basada en normas.
c) El seguimiento estricto del procedimiento.
d) La preparación técnica del personal.

29.- ¿Cuál de las siguientes opciones NO forma parte de la fase de formulación de políticas públicas?

a) Establecer metas, y objetivos a alcanzar.
b) Generar alternativas que permitan alcanzar los objetivos.
c) Comparar y valorar las alternativas.
d) Implantar las alternativas elegidas.

30.- El concepto de transparencia en la acción pública NO implica:

a) Que las decisiones que se llevan a cabo se realicen de forma tal que sigan las leyes establecidas y las normas.
b) Que la información estará disponible para cualquier persona afectada por esas decisiones y su implementación.
c) Que se de participación en el proceso de toma de decisiones a los actores implicados y/o afectados.
d) Que se facilite la suficiente información y que esta sea fácilmente comprensible.

31.- El concepto relacionado con la acción pública que hace referencia a la forma de gobierno que sitúa a la ciudadanía en el centro de la actividad pública, y consiste en dar participación en el proceso de gobierno a la red de actores implicados es:

a) La gobernanza.
b) La gobernabilidad.
c) La calidad democrática de la representación política.
d) La administración electrónica.

32.- En referencia al desarrollo de la sociedad de la información se considera que uno de los más importantes frenos a su difusión se encuentra en el fenómeno social de:

a) El desfase de renta disponible.
b) La desigualdad de género.
c) La denominada “brecha digital”.
d) La reducida cultura matemática.

33.- Dentro de los estilos de liderazgo establecidos por Goleman es considerado como negativo el:

a) Imitativo
b) Orientativo
c) Democrático
d) Formativo

34.- La Delegación de firma:

a) No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
b) Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación
c) Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.
d) No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.

35.- La encomienda de gestión a órganos de la propia Administración de la Junta de Andalucía:

a) Supone la cesión de la titularidad de la competencia y deberá publicarse en el Diario Oficial correspondiente para general conocimiento.
b) No supone la cesión de la titularidad de la competencia y deberá publicarse en el Diario Oficial correspondiente para su eficacia.
c) No se precisa publicación para su eficacia.
d) No supone la cesión de la titularidad de la competencia y no será necesaria su publicación para su eficacia.

36.- El procedimiento administrativo será impulsado por:

a) El órgano ante el que se haya presentado la solicitud.
b) El órgano competente para resolverlo.
c) El órgano que lo haya iniciado de oficio.
d) El órgano que se designe en el acuerdo de iniciación del procedimiento sin necesidad de motivación.

37.- Las disposiciones establecidas en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre la potestad sancionadora:

a) Serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual.
b) No serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual.
c) Serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal laboral a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual privada.
d) Serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual administrativa o privada.

38.- El acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos en el procedimiento administrativo:

a) Debe notificarse al interesado a efectos de su posible impugnación.
b) Es inimpugnable.
c) Es impugnable en la vía contenciosa-administrativa.
d) Es inimpugnable, no siendo necesaria su notificación expresa al interesado.

39.- Interpuesto cualquier recurso, el órgano competente para su resolución podrá suspender la ejecución del acto impugnado:

a) Siempre de oficio cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho.
b) A solicitud del recurrente cuando la impugnación se fundamente en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso la desviación de poder.
c) De oficio o a solicitud del recurrente cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho.
d) De oficio o a solicitud del recurrente cuando la impugnación se fundamente en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso la desviación de poder.

40.- Contra el acuerdo de necesidad de ocupación en los procedimientos de expropiación forzosa procederá interponer:

a) Recurso de alzada, que no suspenderá la ejecutoriedad del acuerdo de ocupación.
b) Recurso de alzada, que surtirá efectos suspensivos hasta tanto se dicte resolución expresa.
c) Recurso de reposición, que surtirá efectos suspensivos hasta tanto se dicte resolución expresa.
d) El acuerdo de necesidad de ocupación no es susceptible de recurso alguno.

41.- Si el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos se hubiera iniciado de oficio:

a) El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la prescripción del mismo.
b) El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.
c) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la prescripción del mismo.
d) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

42.- En el caso de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior:

a) No podrá dictarse en ningún caso.
b) Se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.
c) Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria de dicho acto.
d) a) y b) son correctas.

43.- La competencia para resolver el recurso extraordinario de revisión en la Administración de la Junta de Andalucía corresponderá:

a) Al superior jerárquico del órgano que dictó el acto impugnado.
b) Al mismo órgano que dictó el acto impugnado.
c) Al mismo órgano que dictó el acto impugnado previo dictamen del Consejo Consultivo.
d) Al Consejo de Gobierno, previo dictamen del Consejo Consultivo.

44.- Quienes presenten alegaciones en el trámite de información pública efectuado para la aprobación de los planes hidrológicos de demarcación:

a) Tendrán derecho a obtener una respuesta razonada en cualquier caso.
b) Solo tendrán derecho a obtener una respuesta razonada quienes acrediten su condición de interesado.
c) Serán exclusivamente los que tendrán derecho a interponer recurso contra la resolución definitiva.
d) Podrán obtener una respuesta razonada.

45.- Los bienes de dominio privado pertenecientes a Entidades de derecho público dependientes de la Comunidad:

a) Quedan regulados por la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía
b) Se regulan por sus leyes especiales y, en su defecto por la Ley del Patrimonio de Andalucía y las normas generales de derecho privado
c) Se regularán por normas de derecho privado
d) Se regularan por los Convenios de colaboración que se formalicen entre la Comunidad Autónoma y la entidad de derecho público a la que pertenezcan.

46.- Son características comunes a los bienes de dominio público:

a) Su inalienabilidad y prescriptibilidad.
b) Su usucapibilidad.
c) Su inembargabilidad.
d) Su prescriptibilidad e inembargabilidad.

47.- Las discrepancias que se produzcan en la Junta de Andalucía entre dos o más Departamentos en materia de afectación, mutación y desafectación de bienes serán resueltas por:

a) El titular de la Consejería competente en materia de Patrimonio.
b) El Consejo de Gobierno.
c) El titular de la Dirección General de Patrimonio.
d) Los titulares de las Consejerías afectadas.

48.- La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales en el orden contencioso-administrativo corresponde:

a) Exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia.
b) Al órgano administrativo que haya dictado el acto impugnado, mediante la correspondiente orden de cumplimiento en la que se indiquen las actuaciones necesarias para que se practique lo declarado en el fallo.
c) Exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya dictado la sentencia firme.
d) A los jueces y Tribunales de este orden jurisdiccional y al órgano administrativo que haya dictado el acto impugnado, mediante la correspondiente orden de cumplimiento en la que se indiquen las actuaciones necesarias para que se practique lo declarado en el fallo.

49.- La costumbre y el precedente administrativo:

a) Son fuentes del Derecho Administrativo.
b) No son fuentes del Derecho Administrativo.
c) La costumbre no es fuente del Derecho Administrativo y el precedente administrativo sí.
d) La costumbre sí es fuente del Derecho Administrativo y el precedente administrativo no.

50.- Si la norma reguladora de un procedimiento prevé, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe:

a) No podrá delegarse la competencia para resolver dicho procedimiento.
b) Podrá delegarse la competencia para resolver dicho procedimiento después de haberse emitido el informe o dictamen si éste es preceptivo pero no vinculante.
c) No podrá delegarse la competencia para resolver dicho procedimiento una vez que se haya emitido el dictamen o informe preceptivo.
d) Podrá delegarse la competencia para resolver dicho procedimiento una vez que se haya emitido el dictamen o informe preceptivo.

51.- Los conflictos de atribuciones:

a) Sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, y respecto de asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
b) Sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto de asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
c) Sólo podrán suscitarse entre órganos de distintas Administraciones no relacionadas jerárquicamente, y respecto de asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
d) Sólo podrán suscitarse entre órganos una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto de asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo.

52.- El incumplimiento de instrucciones y órdenes de servicio:

a) No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
b) Afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
c) Determina la nulidad de pleno derecho de los actos dictados por los órganos administrativos.
d) Anula los actos dictados por los órganos administrativos.

53.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contará:

a) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de cualquier Administración Pública.
b) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquier registro de la Administración competente por razón de la materia.
c) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
d) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su resolución.

54.- En los procedimientos iniciados de oficio, el silencio administrativo:

a) Tendrá efectos positivos en caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas.
b) Tendrá efectos positivos en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen.
c) Tendrá efectos positivos o negativos según dispongan las normas reglamentarias que regulen los respectivos procedimientos.
d) Nunca tendrá efectos positivos.

55.- Las resoluciones administrativas de carácter particular:

a) Podrán ser contrarias a lo establecido en una disposición de carácter general cuando sean dictadas por el Gobierno de la Nación o por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
b) Podrán ser contrarias a lo establecido en una disposición de carácter general cuando tengan superior rango a éstas.
c) Podrán ser contrarias a lo establecido en una disposición de carácter general cuando sean dictadas por mismo órgano que dictó la disposición de carácter general.
d) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general aunque tengan igual o superior rango a éstas.

56.- Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento:

a) No suspenderán la tramitación del mismo.
b) No suspenderán la tramitación del mismo salvo las que se refieran a la nulidad de actuaciones.
c) No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
d) Suspenderán la tramitación del mismo.

57.- La caducidad, como forma de finalización del procedimiento administrativo:

a) Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de resolución.
b) No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
c) No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.
d) Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de resolución.

58.- El plazo para interponer las reclamaciones previas a la vía judicial civil será:

a) El plazo de prescripción de la acción que se pretenda ejercitar.
b) Un mes.
c) Dos meses.
d) Tres meses.

59.- Una resolución administrativa sancionadora que ha sido recurrida en alzada:

a) Será ejecutiva porque la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
b) Será ejecutiva pero podrá suspenderse su ejecución si pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) No será ejecutiva porque no pone fin a la vía administrativa.
d) Será ejecutiva pero podrá suspenderse su ejecución previa prestación de caución o garantía suficiente.

60.- Respecto de las cuestiones litigiosas relativas a contratos privados de las Administraciones Públicas:

a) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.
b) El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.
c) El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y adjudicación; y el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para las relativas a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.
d) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y adjudicación; y el orden jurisdiccional civil para las relativas a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.

61.- El recurso de apelación contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo:

a) Es admisible en un solo efecto, salvo en los casos en que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa disponga otra cosa.
b) Es admisible en ambos efectos, salvo en los casos en que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa disponga otra cosa.
c) Impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida.
d) Tiene efectos suspensivos solo si se adoptan las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar la ejecución de la sentencia.

62.- ¿En qué supuesto se produce la suspensión automática del acto recurrido?

a) Cuando se preste garantía o caución suficiente para responder de los perjuicios.
b) Cuando el recurso se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo.
c) En las reclamaciones económico-administrativas.
d) En el recurso especial en materia de contratación interpuesto contra la adjudicación.

63.- Según la Ley de Carreteras de Andalucía:

a) Está prohibido realizar cualquier tipo de publicidad en lugar visible desde la calzada.
b) Es posible realizar publicidad fuera de la zona de dominio público.
c) Puede realizarse publicidad con autorización.
d) Pueden colocarse determinados carteles informativos fuera de la zona de dominio público, previa comunicación.

64.- Los convenios de colaboración producen efectos:

a) Una vez se publiquen en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial de la Comunidad Autónoma.
b) Desde el momento de su firma.
c) Según se establezca en el propio convenio.
d) Con la inscripción en el Registro correspondiente.

65.- ¿En cuál de los siguientes procedimientos o materias el silencio administrativo es positivo?

a) Instalación, transmisión y traslado de oficinas de farmacia.
b) Establecimiento de servicios de transporte colectivo urbano de viajeros.
c) Inscripción en el Registro de Cooperativas.
d) Deslinde de bienes patrimoniales.

66.- El derecho al uso privativo de aguas subterráneas se adquiere:

a) Por prescripción.
b) Por autorización.
c) Por ostentar la propiedad de la finca donde se abra el pozo.
d) Por concesión.

67.- La celebración de convenios de colaboración por la Junta de Andalucía requiere informe preceptivo de:

a) Consejo Consultivo en todo caso.
b) Intervención General en todo caso.
c) Gabinete Jurídico en todo caso.
d) Gabinete Jurídico e Intervención General en todo caso.

68.- El plazo de un año para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:

a) Es un plazo de caducidad.
b) Es un plazo de prescripción.
c) Empieza a computarse desde que se produce el daño físico o psíquico a las personas.
d) Se computa en todos los casos a partir del día siguiente en que se produce el hecho causante.

69.- En qué supuesto no cabe recurso de casación contra una sentencia dictada en única instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía:

a) Cuando haya recaído en el procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales.
b) En todo caso cuando se refiera a cuestiones de personal.
c) Las dictadas en materia electoral.
d) En todo caso cuando la cuantía no exceda de 150.000 euros.

70.- La inclusión en el Registro Mercantil de lo bienes inmuebles inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz:

a) Precisa la conformidad del propietario.
b) Requiere la formalización de escritura pública.
c) No es posible.
d) Requiere certificación administrativa expedida por la consejería competente en materia de patrimonio histórico con los requisitos de la legislación hipotecaria.

71.- Según la normativa estatal básica y el Decreto 293/2009, de 7 julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, los taxis adaptados por municipio deben, al menos, ser los siguientes:

a) El 5% en municipios de más de 50.000 habitantes en 2015.
b) El 5% en 2015.
c) El 5% en 2017.
d) El 8% en municipios de más de 500.000 en 2015.

72.- NO se encuentran sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, -LCSP-:

a) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades que la LCSP considera sector público a los efectos de contratación de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y privado.
b) Los contratos de obras que celebren los concesionarios de obras públicas cuando la adjudicación se realice por el propio concesionario y tenga el carácter de poder adjudicador.
c) Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles.
d) Los contratos subvencionados por los entes, organismos y entidades del sector público que celebren otras personas físicas o jurídicas, siempre que estén sujetos a una regulación armonizada.

73.- Según la LCSP, la mesa especial del dialogo competitivo:

a) Es un órgano consultivo.
b) Es poder adjudicador.
c) Es un órgano de asistencia.
d) Es un órgano de arbitraje.

74.- Según el artículo 36 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el proyecto de Ley del Presupuesto y la documentación anexa se remitirán al Parlamento de Andalucía, para su examen, enmienda y aprobación:

a) Al menos dos meses antes de la expiración del Presupuesto corriente.
b) Al menos 3 meses antes de la expiración del Presupuesto corriente.
c) Antes del 30 de septiembre de cada año.
d) El Decreto Legislativo 1/2010 no fija plazo para ello.

75- La aprobación de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito es competencia de:

a) La persona titular de la Consejería con competencias en materia de Hacienda.
b) El Consejo de Gobierno.
c) El Parlamento.
d) Depende de la cuantía de los mismos.

76.- Es competente para exigir al beneficiario de una subvención el reintegro de la misma:
a) El órgano pagador.
b) El órgano concedente.
c) La Intervención General.
d) La Cámara de Cuentas.

77.- Según el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la Cuenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía se remitirá para su examen y comprobación antes del 30 de septiembre de cada año:

a) Al Tribunal de Cuentas.
b) A la Cámara de Cuentas de Andalucía.
c) Al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía.
d) A la Intervención General de la Junta de Andalucía.

78.- La prescripción del derecho de la Hacienda de la Junta de Andalucía a reconocer o liquidar créditos a su favor y al cobro de los créditos reconocidos o liquidados:

a) Debe ser invocada por el interesado.
b) Se aplicará de oficio.
c) Se produce a los cinco años desde el reconocimiento o liquidación.
d) Tales derechos son imprescriptibles.

79.- Según el artículo 86 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la Intervención de la Junta de Andalucía es el órgano superior de control:

a) Previo y/o sucesivo
b) Concomitante
c) Interno
d) Externo

80.- No están sometidos a Intervención previa:

a) Los gastos menores de 30.000€.
b) Los contratos menores definidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
c) La ordenación formal del pago.
d) La ordenación material del pago.

81.- Las adquisiciones a título lucrativo en favor de la Comunidad Autónoma, o de cualquiera de las Entidades públicas dependientes de ella, deberán ser previamente aceptadas por:

a) Decreto del Consejo de Gobierno.
b) Ley del Parlamento de Andalucía.
c) Orden de la persona titular de la Consejería con competencia en materia de Hacienda.
d) La Comunidad Autónoma no puede adquirir bienes a título lucrativo.

82.- La solicitud de devolución de una tasa en materia de juego corresponde resolverla a:

a) La Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) El Tribunal Económico-Administrativo
c) La Consejería de Gobernación y Justicia.
d) La Agencia Tributaria de Andalucía.

83.- La habilitación por Ley para que la Junta de Andalucía pueda emitir deuda pública es una limitación impuesta por:

a) El Estatuto de Autonomía.
b) La Constitución.
c) El Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y el Estatuto de Autonomía.
d) Todas las normas anteriores.

84.- El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos:

a) Es un tributo estatal cedido sin que exista en Andalucía un tipo de gravamen autonómico.
b) Es un tributo estatal cedido habiéndose aprobado en Andalucía un tipo de gravamen autonómico.
c) Es un tributo estatal cedido habiéndose aprobado en Andalucía un tipo de gravamen autonómico con un sistema de devolución tributaria para el gasóleo profesional de uso general.
d) La normativa reguladora de este impuesto sólo permite la existencia de un tipo de gravamen estatal.

85.- En caso de que el contrato de trabajo resultase nulo:

a) El despido del trabajador también resultará nulo.
b) El trabajador podrá optar entre la readmisión o una indemnización de 45 días de salario por año trabajado.
c) El trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido.
d) El trabajador no podrá exigir, por el trabajo que ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido.

86.- Todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador:

a) Serán satisfechas por el mismo, siendo nulo todo pacto en contrario.
b) Serán satisfechas por el mismo, pero podrá pactarse en el contrato de trabajo su reparto con el empleador.
c) Serán satisfechas por el mismo, pero mediante convenio colectivo podrá acordarse su reparto con el empleador.
d) Serán satisfechas por el mismo, pero podrá repercutirlas al empleador en caso de despido.

87.- Los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional:

a) Gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto cuando éste se encuentre garantizado por prenda o hipoteca.
b) Gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque éste se encuentre garantizado por prenda o hipoteca.
c) Tendrán la condición de singularmente privilegiados, gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real.
d) Tendrán la condición de singularmente privilegiados, gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho personal.

88.- En caso de cesión ilegal de trabajadores, los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a:

a) Adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa de trabajo temporal debidamente autorizada o en la empresa cedente.
b) Adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o en la empresa cesionaria.
c) Adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa usuaria o en la empresa cesionaria.
d) Adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa de trabajo temporal aunque no esté debidamente autorizada o en la empresa cedente.

89.- El acto administrativo mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce a la persona que inicia una actividad su condición de incluida en el campo de aplicación de un determinado Régimen de la Seguridad Social, en función del tipo de actividad desarrollada, con los derechos y obligaciones correspondientes, se denomina:

a) Afiliación.
b) Alta.
c) Inscripción.
d) Matriculación.

90.- Los titulares de cargos que sean nombrados por Decreto:

a) Forman parte de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
b) No forman parte de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
c) Son personal eventual de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
d) Son órganos superiores de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

91.- De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal eventual:

a) No es empleado público.
b) Es empleado público clasificado como personal funcionario.
c) Es empleado público pero no está clasificado como personal funcionario.
d) Es empleado público clasificado como personal directivo profesional.

92.- La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo profesional:

a) No tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos del Estatuto Básico del Empleado Público.
c) Será competencia exclusiva del Gobierno por su carácter básico.
d) Sólo se podrá negociar en la Mesa General, no en las Mesas Sectoriales.

93.- La carrera horizontal prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público:

a) Consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional.
b) Consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
c) Consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión.
d) Consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo a otro superior.

94.- La preparación para el acceso a la función pública con dedicación igual o inferior a 75 horas anuales que no implique incumplimiento del horario de trabajo:

a) Es una actividad exceptuada del régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
b) Es una actividad incluida en el régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
c) Es una actividad incluida en el régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, si se percibe complemento específico en concepto de incompatibilidad.
d) Es una actividad incluida en el régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, si se percibe complemento específico en concepto de dedicación exclusiva.

95.- La deducción proporcional de haberes por la parte de jornada no realizada:

a) Es una sanción disciplinaria.
b) No es una sanción disciplinaria y es compatible con la sanción disciplinaria que pueda corresponder.
c) No es una sanción disciplinaria y es incompatible con las sanciones disciplinarias.
d) Es una sanción disciplinaria sólo aplicable a faltas leves.

96.- Un funcionario condenado penalmente por unos hechos:

a) No podrá ser corregido disciplinariamente por los mismos hechos.
b) Podrá ser sometido a un tribunal de honor por los mismos hechos.
c) Podrá ser corregido disciplinariamente por los mismos hechos.
d) Quedará exento de responsabilidad patrimonial por los mismos hechos.

97.- La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo:

a) Cometerá un delito de cohecho activo propio.
b) Cometerá un delito de cohecho activo impropio.
c) Cometerá un delito de cohecho pasivo propio.
d) Cometerá un delito de cohecho pasivo impropio.

98.- Según dispone el Estatuto Básico del Empleado Público el personal laboral, en función de la duración del contrato, podrá ser:

a) Fijo o temporal.
b) Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
c) Fijo o por tiempo indefinido.
d) Por tiempo indefinido o temporal.

99.- Según la Ley 13/2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la violencia de género:

a) La Consejería competente en materia de violencia de género elaborará anualmente un Plan de medidas de prevención y protección contra la violencia de género en Andalucía.
b) El Consejo de Gobierno aprobará cada cinco años un Plan Integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía.
c) El Parlamento aprobará el Plan anual de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía.
d) La Consejería competente en materia de igualdad ejecutará el Plan estatal anual de protección integral contra la violencia de género.

100.- Las Unidades de Valoración Integral de la violencia de género:

a) Son las encargadas de determinar la existencia de violencia de género.
b) Valoran la rehabilitación del maltratador.
c) Valoran los efectos de la violencia en las mujeres víctimas de violencia de género y en los hijos e hijas menores a su cargo.
d) Todas las anteriores son correctas.

PARTE PRÁCTICA

CASO PRÁCTICO Nº 1

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha elaborado un Reglamento que desarrolla la legislación estatal básica sobre aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

En el proceso de elaboración de la norma autonómica, fueron consultadas las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley cuyos fines guardan relación directa con el objeto de la disposición.

El proyecto de Reglamento, una vez requeridos los informes necesarios, se elevó al Consejo de Gobierno para su aprobación mediante Decreto.

101.- La iniciación del procedimiento de este reglamento se llevará a cabo mediante la elaboración del correspondiente proyecto, al que se acompañará:

a) Un informe sobre la legalidad y viabilidad.
b) Una memoria sobre la necesidad y oportunidad, y un informe sobre legalidad y viabilidad
c) Un informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto, una memoria económica y la memoria de impacto de género.
d) Un informe sobre la legalidad, una memoria económica y una valoración de las cargas administrativas derivadas de la aplicación de la norma para la ciudadanía y las empresas.

102.- ¿Se debió dar audiencia a los ciudadanos?

a) No fue necesario por haber sido consultados consultadas las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley cuyos fines guardan relación directa con el objeto de la disposición.
b) Si, no se puede prescindir de dicho trámite, salvo razones de interés público debidamente motivadas.
c) No será necesario al considerarse una disposición de carácter organizativo.
d) El trámite de información pública deberá celebrarse en cualquier caso, aunque hayan sido consultados los afectados.

103.- En el presente supuesto el informe del Consejo Consultivo será:

a) Facultativo y no vinculante.
b) Preceptivo y no vinculante.
c) Preceptivo y vinculante.
d) Facultativo, si bien una vez requerido el dictamen será vinculante.

104.- El Reglamento será firmado por:

a) El titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía y el Consejero/a de la Presidencia.
b) El Presidente/a de la Junta de Andalucía.
c) El titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía y el titular de la Consejería de Medio Ambiente.
d) El Presidente/a de la Junta de Andalucía, el titular de la Consejería de Medio Ambiente y el titular de la Consejería de la Presidencia.

105.- ¿Puede el Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía delegar en uno de sus Consejeros o Consejeras la firma del Decreto?:

a) Sí, está expresamente previsto en la ley de Gobierno.
b) Sí, excepcionalmente, siempre que se justifique.
c) No, salvo ausencia, vacante o enfermedad.
d) No, se trata de una atribución indelegable.

106.- Si el Reglamento vulnera la Ley estatal básica que desarrolla será:

a) Nulo de pleno derecho.
b) Anulable.
c) Inconstitucional
d) Se trataría de una irregularidad no invalidante.

107.- En caso de impugnación del Reglamento ¿qué recurso podría interponerse desde su notificación?

a) Recurso de alzada
b) Recurso potestativo de reposición
c) Recurso contencioso-administrativo.
d) Recurso de inconstitucionalidad.

108.- El órgano competente para resolver será:

a) El Tribunal Constitucional.
b) El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
c) El Presidente de la Junta de Andalucía.
d) El Consejo de Gobierno.

109.- Si se dictase una resolución administrativa que vulnerase lo establecido en el reglamento:

a) Será anulable si ha sido dictada por órgano de igual jerarquía al que lo haya aprobado.
b) Será valida si la dicta un órgano de superior jerarquía al que lo haya aprobado.
c) Será nula en cualquier caso.
d) Será nula únicamente si ha sido dictada por órgano de igual jerarquía al que lo haya aprobado.

CASO PRÁCTICO Nº 2

La Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda quiere facilitar la implantación de la imagen común en los vehículos de transporte público interurbano adscritos, o que se pretendan adscribir, a las concesiones administrativas otorgadas por la Junta de Andalucía.

Con este objeto, decide poner en marcha una línea de ayudas con cargo al programa 51B del presupuesto de gastos, para lo cual elabora las correspondientes bases reguladoras, que se publican en el BOJA nº 65, de 1 de abril de 2011, junto con la Convocatoria de la ayuda.

Las bases establecen que la concesión de la subvención se realizará en régimen de concurrencia competitiva, y que el importe máximo a conceder por autobús es de 2.000€.

110.- Las bases reguladoras de la subvención deben ser aprobadas por:

a) Orden de la Directora General de Transportes.
b) Orden de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda.
c) Decreto de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda.
d) Decreto del Consejo de Gobierno.

111.- Según el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, NO constituye contenido mínimo de las bases reguladoras:

a) Limitaciones presupuestarias.
b) Financiación y régimen de compatibilidad de la subvención.
c) Obligaciones de las personas beneficiarias.
d) Condiciones de la convocatoria de la subvención.

112.- El día 9 de abril presenta su solicitud, entre otras empresas, la sociedad Transportes Línea, S.L., acompañada de la documentación correspondiente, solicitando la ayuda para 10 vehículos, siendo el coste de la adaptación de los mismos 32.000€.

La Dirección General de Transportes deberá valorar las solicitudes presentadas:

a) De manera conjunta.
b) Conjuntamente y por el mismo personal para todas las solicitudes.
c) De manera independiente.
d) De manera independiente o conjunta, según determine el órgano concedente.

113.- El 15 de mayo de 2011 se le notifica a la empresa Transportes Línea, S.L. la Resolución de Concesión de la ayuda por un total de 20.000€, resultante de la aplicación del importe máximo a conceder por vehículo al total de los 10 vehículos a adaptar. Esto supone un 62,5% del presupuesto presentado.

El plazo que se le concede para realizar la actividad subvencionada es de 3 meses, con un plazo de justificación de 2 meses desde la realización de la misma.

A la hora de justificar la subvención obtenida, la empresa Transportes Línea, S.L. deberá aportar justificantes por:

a) 32.000€, que es el presupuesto presentado, o más, si el coste en que ha incurrido es mayor que el presupuestado.
b) En torno a 32.000€, pero siempre más de 20.000€.
c) 20.000€, que es el importe concedido, pero siempre que la empresa acredite haber alcanzado la finalidad prevista.
d) 20.000€, que es el importe concedido.

114.- Si la empresa justificase gastos por 30.000€, ¿qué efecto tendría sobre el importe de la subvención concedida?

a) No tendría ningún efecto, al haberse justificado más de 20.000€.
b) Se incrementaría la subvención hasta 30.000€, al haberse justificado más de lo concedido.
c) Se reduciría la subvención en el importe no justificado sobre el presupuestado, es decir, se reduciría en 2.000€, y quedaría en 18.000€.
d) Se reduciría la subvención al resultado de aplicar al importe justificado, 30.000€, el porcentaje de financiación concedido, el 62,5%, y quedaría en 18.750€.

115.- La empresa Transportes Líneas quiere solicitar la modificación de la resolución de concesión, a fin de que el órgano concedente aumente el plazo de justificación otorgado.

a) Esta posibilidad no está prevista en la normativa reguladora de la concesión de subvenciones.
b) Sólo sería posible si expresamente se recoge en las bases reguladoras de la subvención.
c) Puede solicitar la ampliación del plazo de justificación, siempre que no exceda de la mitad del inicialmente establecido ni perjudique derechos de terceras personas.
d) Salvo previsión en contrario en las bases reguladoras, el beneficiario podrá solicitar cualquier modificación de la Resolución de concesión.

CASO PRÁCTICO Nº 3

116.- Tras superar el correspondiente proceso selectivo, doña ABC es nombrada funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores Generales, de la Junta de Andalucía por Orden de 15 de septiembre de 2006, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 30 de septiembre de 2006, y toma posesión el 2 de octubre de 2006 con carácter definitivo en un puesto de nivel 22. ¿En qué fecha adquiere la condición de funcionaria?

a) El 15 de septiembre de 2006, fecha de la Orden de nombramiento.
b) El 30 de septiembre de 2006, fecha de publicación de la Orden de nombramiento.
c) El 1 de octubre de 2006, día siguiente a la fecha de publicación de la Orden de nombramiento.
d) El 2 de octubre de 2006, fecha de su toma de posesión.

117.- Doña ABC solicita que se le reconozca como servicios previos el tiempo entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2006 en el que trabajó mediante contrato laboral como auxiliar administrativo, primero en la Empresa Pública de Suelo de Andalucía EPSA, entidad de derecho público que ajustaba su actividad al derecho privado, entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005, y después en Desarrollo Agrario y Pesquero DAPSA, sociedad anónima cuyo capital pertenecía íntegramente a la Junta de Andalucía, entre el 1 de abril de 2005 y el 31 de marzo de 2006. ¿Qué servicios previos procede reconocerle?

a) Procede reconocerle todo el periodo entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2006.
b) Sólo procede reconocerle el periodo en EPSA entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005.
c) Sólo procede reconocerle el periodo en DAPSA entre el 1 de abril de 2005 y el 31 de marzo de 2006.
d) No procede reconocerle servicios previos.

118.- Doña ABC pasó a desempeñar el 2 de enero de 2007 un puesto de nivel 25 con carácter provisional en virtud del procedimiento previsto en el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. El 2 de enero de 2009 pasó a desempeñar un puesto de nivel 26 también provisionalmente, pero esta vez de acuerdo con el procedimiento establecido en artículo 27.2 de la misma Ley. El 2 de octubre de 2010 obtuvo un puesto de nivel 25 con carácter definitivo por concurso de méritos. ¿Qué niveles habrá consolidado como grado personal?

a) El nivel 22 el 2 de octubre de 2008 y el nivel 24 el 2 de octubre de 2010.
b) El nivel 22 el 2 de octubre de 2008 y el nivel 24 el 2 de enero de 2011.
c) El nivel 24 el 2 de enero de 2009 y el nivel 25 el 2 de enero de 2011.
d) El nivel 24 el 2 de enero de 2009 y el nivel 25 el 2 de octubre de 2010.

119.- El 2 de febrero de 2011 doña ABC toma posesión de un puesto en la Comunidad de Madrid que le ha sido adjudicado tras participar, al amparo de su condición de funcionaria de la Junta de Andalucía, en un procedimiento de libre designación convocado por aquella Comunidad Autónoma y abierto a personal funcionario de otras Administraciones Públicas. ¿En qué situación administrativa procede declararla?

a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector público.
b) Servicio en otras Administraciones Públicas.
c) Comisión de servicios en otras Administraciones Públicas.
d) Servicios especiales.

120.- Tras cesar en el puesto de libre designación en la Comunidad de Madrid, doña ABC reingresa al servicio activo en la Administración General de la Junta de Andalucía el 2 de mayo de 2011 y el 2 de junio de 2011 da a luz un niño. El 2 de noviembre de 2011 pasa a la situación administrativa de excedencia por cuidado de hijos. ¿Hasta qué fecha podrá permanecer en dicha situación?

a) Hasta el 2 de junio de 2014.
b) Hasta el 2 de noviembre de 2014.
c) Hasta el 2 de junio de 2013.
d) Hasta el 2 de noviembre de 2013.

121.- Don XYZ, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores Generales, de la Junta de Andalucía, pasa a prestar servicios en el Servicio Andaluz de Salud tras acceder a la condición de personal estatutario de carrera de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. ¿En qué situación administrativa procede declararlo?

a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector público.
b) Servicios en otras Administraciones Públicas.
c) Comisión de servicios en otras Administraciones Públicas.
d) Excedencia voluntaria por prestación de servicio en el Sector público andaluz.

122.- Algún tiempo después, don XYZ desea reingresar al servicio activo en la Administración General de la Junta de Andalucía. ¿Cómo puede hacerlo?

a) Solicitando la adscripción provisional a un puesto de trabajo.
b) Participando en convocatorias de concursos.
c) Participando en convocatorias de concursos y de libre designación.
d) Participando en convocatorias de concursos y de libre designación, y también solicitando la adscripción provisional a un puesto de trabajo.

123.- El 12 de junio de 2005 don XYZ reingresa al servicio activo en la Administración General de la Junta de Andalucía. El 12 de junio de 2007 pasa a la situación administrativa de servicios especiales por haber sido elegido alcalde del ayuntamiento de un municipio de Andalucía. Tras la celebración de las elecciones cesa como alcalde el 12 de junio de 2011. ¿Qué plazo tendrá para solicitar su reingreso al servicio activo en la Administración General de la Junta de Andalucía y qué consecuencias traerá no solicitarlo dentro de dicho plazo?

a) Un mes desde que perdió la condición de alcalde; de no hacerlo dentro de dicho plazo será declarado de oficio en excedencia voluntaria por interés particular.
b) Un mes desde que perdió la condición de alcalde; de no hacerlo dentro de dicho plazo será declarado de oficio en excedencia forzosa.
c) Dos meses desde que perdió la condición de alcalde; de no hacerlo dentro de dicho plazo será declarado de oficio en suspensión provisional de funciones.
d) Seis meses desde que perdió la condición de alcalde; de no hacerlo dentro de dicho plazo perderá la condición de funcionario.

124.- Cuando fue declarado en servicios especiales con motivo de su elección como alcalde, don XYZ venía desempeñando con carácter definitivo un puesto de libre designación de nivel 27 desde el 12 de junio de 2005 y había consolidado un grado personal correspondiente al nivel 22 con efectos de 12 de junio de 2006. ¿Qué niveles habrá consolidado como grado personal durante el periodo en que ha desempeñado el cargo de alcalde?

a) El nivel 24 el 12 de junio de 2008, el nivel 26 el 12 de junio de 2010 y el nivel 27 el 12 de junio de 2011.
b) El nivel 30 por haber desempeñado un alto cargo.
c) Ninguno porque la situación de servicios especiales no computa a efectos de consolidación de grado personal.
d) El nivel 24 el 12 de junio de 2008 y el nivel 26 el 12 de junio de 2010.

125.- Con motivo de su gestión como alcalde, don XYZ es condenado por un delito de malversación de caudales públicos mediante sentencia firme de 2 de noviembre de 2011 a las penas de tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta. ¿Qué consecuencias le supondrá dicha condena?

a) Pasará a la situación administrativa de excedencia forzosa durante seis años.
b) Pasará a la situación administrativa de suspensión firme de funciones durante seis años.
c) Pasará a la situación administrativa de suspensión firme de funciones durante los tres primeros años y suspensión provisional durante los tres restantes.
d) Perderá la condición de funcionario.

CASO PRÁCTICO Nº 4

En el BOJA de 23 de septiembre de 2011 la Consejería de Gobernación y Justicia anuncia la licitación de un contrato para la elaboración y divulgación de una guía de recursos en materia de asistencia a las víctimas de delitos en Andalucía, por un plazo de ejecución de 9 meses y con un presupuesto base de licitación de 60.000 euros, IVA excluido.

126.- ¿A qué tipo de contrato, de los contemplados en la Ley de Contratos del Sector Público, hace referencia el supuesto práctico?

a) Contrato de colaboración en materia de propiedad intelectual.
b) Contrato de consultoría y asistencia técnica.
c) Contrato de servicios.
d) Contrato de gestión de servicios públicos

127.- ¿Es necesaria la clasificación del empresario para concurrir al contrato al que se refiere el supuesto práctico?

a) Sí, por ser el presupuesto del contrato superior a 50.000 euros.
b) Sí, por el contenido social del trabajo a contratar.
c) No, por ser el presupuesto del contrato inferior a 100.000 euros.
d) No, por ser el presupuesto del contrato inferior a 120.000 euros

128.- ¿Puede seguirse el procedimiento negociado en la adjudicación del contrato del supuesto práctico?

a) Sí, por ser su valor estimado inferior a 100.000 euros.
b) Sí, por tratarse de un contrato de colaboración en materia de propiedad intelectual
c) Sólo si ha resultado desierto el procedimiento abierto.
d) No, por ser su valor estimado superior a 50.000 euros.

129- Cuando exista incumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte del contratista:

a) Se resolverá el contrato de forma automática sin necesidad de requerimiento previo.
b) En todo caso se resolverá el contrato y el contratista perderá la garantía prestada.
c) El contratista deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, siempre que el incumplimiento resulte culpable.
d) Deberá requerírsele fehacientemente el cumplimiento del contrato.

130- ¿Cuál de los siguientes actos son susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo al recurso contencioso- administrativo?

a) Los actos referidos a contratos de servicios.
b) Los actos referidos a contratos de obras sujetos a regulación armonizada.
c) Los contratos subvencionados.
d) b y c son correctas.

CASO PRÁCTICO Nº 5

131.- Don FGH sufre un accidente el 3 de enero de 2011 cuando circulaba en automóvil por una carretera de interés autonómico de la red viaria de Andalucía. Es ingresado en un hospital dependiente del Servicio Andaluz de Salud donde permanece hasta el 3 de febrero de 2011, día en que es dado de alta por curación. Don FGH considera que el accidente fue producido por el mal estado de conservación de la carretera y pretende reclamar una indemnización de 70.000 euros a la Junta de Andalucía. ¿Qué día prescribirá su derecho a reclamar?

a) El 3 de enero de 2012.
b) El 3 de febrero de 2012.
c) El 3 de julio de 2012.
d) El 3 de agosto de 2012.

132.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se iniciarán:

a) Por reclamación de los interesados.
b) Por orden superior o denuncia.
c) De oficio.
d) De oficio o por reclamación e los interesados.

133.- El 3 de marzo de 2011 Don FGH presenta una solicitud en el registro general de los servicios centrales de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía. El 3 de noviembre de 2011 todavía no había recibido resolución expresa. ¿Cómo habrá considerar don FGH su solicitud a dicha fecha?

a) Estimada por silencio administrativo. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa confirmatoria del acto.
b) En trámite por no haber transcurrido el plazo máximo para resolverla.
c) Desestimada por silencio administrativo a los solos efectos de permitir la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo procedente. La Administración está obligada a dictar resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.
d) Desestimada por silencio administrativo a los solos efectos de permitir la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo procedente. La Administración está obligada a dictar resolución expresa vinculada al sentido del silencio.

134.- El 14 de noviembre de 2011 Don FGH recibe resolución desestimatoria de su solicitud de indemnización. El 18 de noviembre de 2011 Don FGH presenta contra dicha resolución recurso que califica como de alzada. Respecto de este recurso procederá:

a) Su estimación.
b) Su inadmisión.
c) Su tramitación como reclamación previa a la vía judicial civil.
d) Su tramitación como recurso de reposición.

135.- Otro paciente ingresado en el mismo hospital que don FGH, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, considera que ha sufrido un daño como consecuencia de una presunta asistencia sanitaria negligente prestada por un médico de ese centro sanitario. ¿Cómo habrá de proceder este paciente si pretende el resarcimiento de dicho daño?

a) Habrá de ejercer la acción de responsabilidad prevista en el artículo 1902 del Código Civil directamente contra el facultativo que lo atendió, y subsidiariamente contra el Servicio Andaluz de Salud.
b) Habrá de interponer directamente reclamación administrativa previa al ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en el artículo 1902 del Código Civil ante el Servicio Andaluz de Salud.
c) Podrá ejercer la acción de responsabilidad prevista en el artículo 1902 del Código Civil directamente contra el facultativo que lo atendió, y simultáneamente presentar ante el Servicio Andaluz de Salud reclamación de responsabilidad patrimonial al amparo de lo establecido en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Habrá necesariamente de presentar directamente reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servicio Andaluz de Salud al amparo de lo establecido en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CASO PRÁCTICO Nº 6

136.- Mientras se encuentra ingresado en el hospital, don FGH medita sobre su futuro profesional y decide intentar el ingreso en la Junta de Andalucía como personal laboral. ¿Qué procedimientos establece con carácter general el VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía para la selección de personal?

a) Concurso para todos los grupos.
b) Concurso-oposición para todos los grupos.
c) Concurso-oposición para los grupos I y II; y concurso para los grupos III, IV y V. No obstante, cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñar resulte adecuado y lo acuerde la Comisión del Convenio, podrá llevarse a cabo la selección de personal con la celebración de pruebas adecuadas para categorías profesionales de los grupos III, IV y V.
d) Concurso para todos los grupos. No obstante, cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñar resulte adecuado y lo acuerde la Comisión del Convenio, podrá llevarse a cabo la selección de personal con la celebración de pruebas adecuadas para categorías profesionales de los grupos I y II.

137.- ¿En qué grupo o grupos de clasificación profesional del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía se podrá sustituir la titulación exigida para el acceso por experiencia profesional?

a) En todos los grupos.
b) En los grupos III, IV y V.
c) En los grupos IV y V.
d) Sólo en el grupo V.

138.- Superado el correspondiente procedimiento selectivo, don FGH accede a una categoría profesional encuadrada en el grupo III de clasificación del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. ¿Podrán sus superiores encomendarle funciones correspondientes a una categoría profesional de un grupo inferior?

a) No; el VI Convenio Colectivo prohíbe la movilidad funcional correspondiente a categorías de un grupo inferior:
b) Sí; pero no podrá exceder de quince días sin que pueda realizar estas funciones hasta que haya transcurrido un año desde su finalización.
c) Sí; pero no podrá exceder de tres meses, sin que pueda realizar estas funciones hasta que haya transcurrido un año desde su finalización.
d) Sí; pero no podrá exceder de seis meses, sin que pueda realizar estas funciones hasta que haya transcurrido un año desde su finalización.

139.- Don FGH está interesado en acceder por promoción a una categoría profesional encuadrada en el grupo I de clasificación del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.¿Cómo podrá hacerlo?

a) Por concurso de promoción directamente desde el grupo III al grupo I.
b) Por concurso de promoción pasando necesariamente primero del grupo III al II y después del grupo II al I.
c) Por concurso de promoción pasando necesariamente primero del grupo III al II y después del grupo II al I; o por concurso-oposición de promoción pasando directamente del grupo III al grupo I.
d) Por concurso de promoción específico directamente desde el grupo III al grupo I.

CASO PRÁCTICO Nº 7

Por resolución de la Dirección General de Transportes de 24 de mayo de 2007 se aprobó el proyecto denominado "Construcción del Tren tranvía entre Chiclana de la Frontera y San Fernando. Tramo Caño Zurraque-San Fernando", que conlleva, según la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la declaración de utilidad pública y necesidad y urgencia de la ocupación de los terrenos a efectos de expropiación forzosa.

En la relación de fincas afectadas por la expropiación figuran las siguientes:

- Finca nº 19. Olivar secano. Ocupación definitiva 868 m2. Ocupación temporal 3.852 m2. Alberto Castro Muñoz.
- Finca nº 38. Olivar secano. Ocupación definitiva 1.500 m2. Eugenia González Hornos.
- Finca nº 52. Edificio en suelo urbano. 70 m2 de solar. 180 metros construidos. Sociedad Cooperativa Andaluza "Santa María Magdalena".

El levantamiento de las Actas previas a la ocupación tiene lugar el 15 de julio de 2007 y el 12 de septiembre del mismo año se abonan los depósitos previos.

140.- Si el justiprecio de la finca nº 19 se fija en 4.000 euros, ¿Cuál sería el importe total de la indemnización con el premio de afección?

a) 4.000 euros.
b) 4.250 euros.
c) 4.200 euros.
d) 4.500

141- ¿Cuál es el órgano competente para fijar el justiprecio?

a) El Jurado Provincial de Expropiaciones.
b) La Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
c) La Comisión Provincial de Valoraciones.
d) La Comisión Provincial de Expropiaciones.

142- La adquisición de la finca nº 38 se lleva a cabo por mutuo acuerdo el 16 de octubre de 2007 y el Justiprecio de las fincas 19 y 52 se determina, respectivamente, por resoluciones de 29 de mayo de 2008 y 15 de abril de 2009, ¿Qué finca/s tiene/n derecho a los intereses de demora previstos en el artículo 56 de la Ley de Expropiación Forzosa?

a) La número 19 y 52.
b) Las tres fincas.
c) La número 52.
d) Ninguna.

143.- -¿Tiene el propietario de la finca número 19 derecho al pago de indemnización por la ocupación temporal si durante la realización de la obra no se lleva efectivamente a cabo dicha ocupación?

a) No, porque no se ha utilizado en la obra.
b) No, porque se produce una desafectación presunta.
c) Sí, al encontrarse afectada.
d) Sí, sólo por los daños y perjuicios que acredite.

144.- Considerando que la obra incluye una instalación para la conservación y mantenimiento de la carretera, ¿se encuentra sujeta su construcción a licencia municipal?

a) Sí, si se encuentra fuera de la zona de dominio público adyacente a la carretera.
b) Sí, en cualquier caso.
c) No.
d) No, si se encuentra en la zonas de servidumbre o de dominio público.

La titular de la finca nº 52 cuestiona la declaración de utilidad pública, interés social y necesidad de urgente ocupación y recurre en vía contencioso-administrativa la Resolución citada de la Dirección General de Transportes.

El 15 de octubre de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estima el recurso contencioso-administrativo declarando nula la resolución y dejando "asimismo sin efecto los actos y trámites de ejecución llevados a cabo por la Administración demandada para la ejecución del proyecto, con lo efectos restitutorios inherentes que sean oportunos". El fallo se fundamenta en la omisión del trámite de información pública previsto en el

artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. La sentencia deviene firme por providencia de 15 de diciembre de 2010.

145.- ¿Puede la Administración subsanar la resolución anulada por el TSJA?

a) Sí, realizando la información pública omitida.
b) Sí, realizando la información pública y aprobando nuevamente el proyecto.
c) No.
d) Sí, cumpliendo lo dispuesto en a) y b) más el pago de una indemnización.

146-¿Qué procede respecto del propietario de la finca cuyo recurso se ha estimado considerando que, en el momento de declararse la firmeza de la sentencia, la obra no ha concluido en la misma pero el edificio ha sido demolido?

a) Mantener la expropiación, al no poder devolver el bien en el estado en que se entregó, sin alterar el valor del justiprecio.
b) Devolver la finca abonando además una indemnización compensatoria.
c) Plantear a la Sala la imposibilidad de ejecutar la sentencia según lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
d) Que la Administración abone directamente al propietario una indemnización sustitutoria por los daños y perjuicios que le ha ocasionado la vía de hecho establecida del valor de justiprecio más un 25%.

CASO PRÁCTICO Nº 8

El 3 de enero de 2009, a las 7:30 horas, el empleado de una gasolinera próxima observa que dos personas están arrojando un colchón usado y un somier en el terraplén de la carretera A-334, Kilómetro 45, término municipal de Fines (Almería). Posteriormente se montan en una furgoneta que les esperaba con dos personas más y emprenden la marcha.

Al pasar junto a la gasolinera el empleado anota la matrícula del vehículo y pone en conocimiento del Ayuntamiento de Fines los hechos quien, a su vez, traslada la denuncia a la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Tras la práctica de actuaciones preliminares, la Delegación acuerda el 2 de marzo la incoación de un expediente sancionador por la comisión de una infracción leve tipificada en la Ley de Carreteras de Andalucía. El expediente concluye con la imposición de una sanción de 600 euros por resolución de 10 de enero de 2010, notificada el 22 de enero. El sancionado interpone recurso de alzada el 15 de febrero que se resuelve por resolución de 14 de enero de 2011, notificada el 28 de enero.

147.- Es responsable administrativamente:

a) El conductor.
b) El propietario del vehículo.
c) El conductor y, subsidiariamente, el propietario del vehículo.
d) El autor de la acción.

148-Se encuentra la infracción prescrita:

a) Sí, porque han transcurrido más de seis meses.
b) Sí, porque ha transcurrido más de un año.
c) No.
d) Sí, porque han transcurrido más de tres meses.

149-¿Cuando prescribiría la sanción, considerando los plazos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no los de la Ley de Carreteras de Andalucía?

a) Al año desde la finalización del plazo de resolución del recurso de alzada.
b) A los seis meses desde la finalización del plazo de resolución del recurso de alzada.
c) Al año desde la resolución del recurso de alzada.
d) A los seis meses desde la resolución del recurso de alzada.

150-¿Que sistema de información utilizará la Junta de Andalucía para la cobro de la sanción por vía de apremio?

a) JUPITER
b) SUR
c) SIRhUS
d) ALFRESCO